

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

-Discutida y aprobada en sesión virtual de la fecha –

PROCESO	ACCIÓN POPULAR
ACCIONANTE	BERNARDO ABEL HOYOS MARTÍNEZ
ACCIONADO	RÉDITOS EMPRESARIALES S.A.
VINCULADO	LAS MORAS S.A.S.
RADICADO	05001 31 03 017 2017 00706 02 ACUMULADAS 05001 31 03 017 2018 00225 01 05001 31 03 017 2018 00237 01 05001 31 03 017 2018 00289 01 INTERNO 2022-177
PROCEDENCIA	JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
TEMAS Y SUBTEMAS	LAS ACCIONES POPULARES. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA FAVORABLE EN ACCIÓN POPULAR. DERECHOS COLECTIVOS
SENTENCIA	Nº 016
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	DRA. MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Procede el Tribunal a través de la presente sentencia, luego de agotada la etapa de sustentación del recurso y alegaciones, a decidir el recurso de apelación, interpuesto por ambos extremos de la *litis*, contra la sentencia escrita proferida el 25 de mayo de 2022 por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, dentro de la acción popular promovida por el señor Bernardo Abel Hoyos Martínez en contra de Réditos Empresariales S.A. (antes GANA S.A.), trámite constitucional al que fue vinculada Las Moras S.A.S., advirtiendo que en la presente causa se acumularon las acciones populares que contra la misma accionada presentó el actor popular, refiriéndose en cada una de ellas a diferentes establecimientos de comercio. La sentencia se profiere por escrito, conforme lo establecido en la Ley 2213 de junio 13 de 2022 que adoptó como legislación permanente el Decreto 806 de 2020.

I. ANTECEDENTES

1. FUNDAMENTO FÁCTICO

Teniendo en cuenta como se advirtió, que el señor Bernardo Abel Hoyos Martínez presentó varias acciones populares en contra de Réditos Empresariales S.A. (antes GANA S.A.), se hará referencia a cada una de ellas como sigue:

- **RADICADO 05001 31 03 017 2017 00706:** El accionante denuncia vulneración de los derechos colectivos de los ciudadanos con limitación física y movilidad reducida, falta de adecuación estructural que permita el acceso a una persona con problemas motrices, acceder de manera libre, independiente y autónoma al local comercial ubicado en la Calle 49 N°48-12 de la ciudad de Medellín. (Archivo digital 01 folio pdf 3/01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

- **RADICADO 05001 31 03 017 2018 00225:** En esta acción popular, por la ocupación del espacio público en área de antejardín, con lo que se genera un uso exclusivamente privado sobre área de espacio público, se denuncia violación al derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como la defensa del patrimonio público; en ella se refiere el actor popular al establecimiento de comercio de propiedad de la accionada que se encuentra ubicado en la Avenida Las Vegas entre la Calle 7 y la Calle 10 de la ciudad de Medellín, indicando en el escrito incoativo de la denuncia de vulneración de derechos colectivos, que dicho establecimiento no tiene visible la nomenclatura. (Archivo digital 01 folio pdf 3/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720180022500).

- **RADICADO 05001 31 03 017 2018 00237:** Se denuncia ausencia de servicios sanitarios de libre, independiente y autónomo ingreso para todas las personas en el establecimiento de comercio ubicado en la carrera 43 N°10-10 de esta ciudad, Avenida El Poblado Edificio San Lorenzo de Aburrá; lo cual va en contravía de los derechos al goce al espacio público, la seguridad y el deber de que las construcciones respeten la calidad de vida. (Archivo digital 01 folio pdf

4/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720180023700).

- RADICADO 05001 31 03 017 2018 00289: El accionante denuncia vulneración de los derechos colectivos de los ciudadanos con limitación física y movilidad reducida, por la existencia de un escalón que se convierte en una barrera arquitectónica que entorpece la autónoma y segura movilidad de personas en estado de discapacidad, el cual se encuentra ubicado en el establecimiento de comercio de propiedad de la accionada en la carrera 70 N°43-04 de la ciudad de Medellín (Archivo digital 01 folio pdf 4/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720180028900).

2. PETICIONES

Con fundamento en los hechos expuestos, se formulan las siguientes pretensiones:

Radicado 2017-00706: Se determine que la accionada no tiene adecuados sus accesos y por lo tanto incurre en violación de la normatividad que la obliga.

Radicado 2018-00225: Se determine que la accionada invade ilegalmente el espacio público y por lo tanto, ordenar que de manera inmediata se desaloje el antejardín.

Radicado 2018-00237: Determinar que la accionada afecta a la población discapacitada por la violación de las limitaciones y condiciones de las normas legales vigentes; en consecuencia, se le ordene respetarlas.

Radicado 2018-00289: Que se determine que la accionada no tiene adecuados sus accesos y por lo tanto incurre en la violación de la normatividad que la obliga.

3. TRÁMITE Y RÉPLICA.

Las demandas fueron admitidas mediante auto de 1° de diciembre de 2017 (Rdo. 2017-00706); 2 de mayo de 2018 (Rdo. 2018-00225); 4 de mayo de 2018 (Rdo. 2018-00237) y 30 de mayo de 2018 (Rdo. 2018-00289); en cada una de estas providencias

se adoptaron las siguientes disposiciones: **(i)** Notificar personalmente a la entidad demandada; **(ii)** Comunicar la existencia de la demanda al Ministerio Público para que interviniera en defensa de los derechos e intereses colectivos, al Municipio de Medellín para que intervenga como entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo y rinda informes sobre los hechos aducidos por el actor y a la Defensoría del Pueblo, para que intervenga en defensa de los derechos e intereses colectivos; **(iii)** Informar a la comunidad de la admisión de la acción popular y el objeto de la misma. La comunicación para efectos de enterar a la comunidad sobre la existencia de las acciones populares se hizo a través de la Dirección Seccional de Administración Judicial; la citación de las entidades públicas enunciadas fue efectuada en debida forma, así como también la notificación de la entidad demandada.

El Procurador Judicial II-10 de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, concurrió para indicar en síntesis y frente a cada uno de los reclamos que, si conforme con las pruebas que lleguen a recaudarse, se demuestra de forma irrefutable que los inmuebles a que hacen referencia las demandas son abiertos al público y no cuentan en sus instalaciones con las adecuaciones completas para el acceso a personas con discapacidad o existen barreras arquitectónicas que impidan el ingreso de personas con movilidad reducida, se acojan las pretensiones y se impartan las órdenes que dispongan la adecuación de los inmuebles a las disposiciones legales. Y que en el evento en que de la práctica de pruebas surjan otros responsables de la presunta vulneración o agravio de los derechos colectivos invocados, se proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 472 de 1998.

La accionada Réditos Empresariales S.A. acudió a través de apoderado judicial para indicar en relación con la demanda que se identifica con radicado **2017-00706** que, el inmueble al que hace referencia ésta fue tomado en arriendo lo que resulta relevante porque para la fecha en que fue interpuesta la acción popular, ya contaba con un plan en ejecución consistente en la intervención sobre dicho punto de venta ubicado en la Calle 49 N°48-12, con el fin de garantizar las condiciones que eliminen las barreras arquitectónicas a personas

con movilidad reducida; intervención que requiere la aprobación del propietario y que consiste en la construcción de una rampa en concreto de 1,16 mts de frente con 0,80 mts de fondo y pasamanos que va desde la línea de paramento hacia el interior del local, por donde se tendrá acceso preferencial para personas con movilidad reducida, obras que se ejecutarían entre el 19 y el 28 de febrero del año 2018. Con fundamento en lo anterior, propuso como excepción: **1. HECHO SUPERADO POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO**, en la medida en que cumplida la obligación que le asiste, se supera el hecho que se denuncia como vulnerador de los derechos colectivos; porque para la fecha en que fue interpuesta la acción popular ya se contaba con un plan de intervención sobre el local comercial y se encontraba en su primera fase de planeación que comprende la elaboración de planos y cálculos, cumpliendo con los requisitos que consagra la jurisprudencia de la Corte Constitucional que otorgan la posibilidad tanto a los particulares como a los entes públicos, de cumplir de forma programática con una carga prestacional como la que se reclama con la presente demanda.

En la respuesta de Réditos Empresariales para la acción popular con radicado **2018-00225**, indica que la Sociedad Las Moras S.A.S. por medio de Escritura Pública N°3171 del 28 de noviembre de 213, otorgada en la Notaría Veintidós de Medellín, adquirió por medio de compraventa, el pleno derecho de dominio y posesión del terreno ubicado en la Carrera 48 N°7-274 de la ciudad de Medellín; identifica los linderos del inmueble y concreta en que dicha sociedad adquirió el pleno derecho de dominio y posesión de un total de 362.464 metros cuadrados, que en virtud de un contrato de arrendamiento de local comercial, Las Moras S.A.S. le otorgó en calidad de arrendamiento a Réditos Empresariales S.A., un espacio total de 4 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado dentro de los 362.464 metros cuadrados de los cuales es propietario el arrendador, sin utilizar porción alguna de espacio público y respetando los límites existentes entre la propiedad privada y el espacio público, así como las normas y directrices de planeación municipal de la Alcaldía de Medellín. Excepciona: **1. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN** en la medida en que no se está incumpliendo con las normas aplicables. **2. BUENA FE** porque ha desarrollado su objeto social cumpliendo a cabalidad con las

obligaciones emanadas de la legislación Colombiana vigente; igualmente los contratos de arrendamiento de local comercial suscritos para el desarrollo del objeto social se han ejecutado conforme a las normas comerciales vigentes y atendiendo cada uno de los requerimientos planteados por las administraciones municipales donde se ejerce la actividad comercial.

En relación con la acción popular que se identifica con radicado **2018-00237** se indica que el punto de venta al que se refiere el actor de manera errónea como el ubicado en la Avenida El Poblado Edificio San Lorenzo de Aburrá, se encuentra en la Carrera 48 N°7-274 (Mall Las Vegas), el cual es un local comercial que tienen bajo contrato de arrendamiento suscrito con la Sociedad Las Moras S.A.S. para una destinación específica; se ocupa de explicar lo que en su concepto corresponde a un establecimiento de comercio a la luz del artículo 515 del Código de Comercio y la diferencia con un local comercial, el cual, según indica, corresponde al espacio físico donde se ofrecen bienes y servicios, mientras que el establecimiento de comercio lo conforman las cosas, objetos o bienes utilizados para realizar la actividad comercial. Seguidamente, teniendo en cuenta que el accionante en su demanda trajo a colación el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, norma que indica la obligación de todos los establecimientos de comercio abiertos al público de prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad, cuando así lo soliciten, precisa que se trata entonces de una obligación frente a ciertas personas y no respecto a todas las personas como lo pretende el accionante, agregando que no necesariamente los servicios sanitarios deben construirse en los establecimientos de comercio o locales comerciales, así como que la obligación de prestar el servicio recae exclusivamente en establecimientos de comercio que por el desarrollo de su actividad comercial, deban contar con este servicio.

De otro lado, cuestiona la labor probatoria del actor, señalando que no logró evidenciar que contiguo al local comercial arrendado a Réditos Empresariales S.A., se encuentran unos baños públicos que pertenecen al Mall Las Vegas, los cuales pueden ser usados por cualquier tipo de persona que lo solicite, situación que puede advertirse del contrato de arrendamiento de local

comercial en el que se indica que el mismo linda por el occidente con el ingreso a los baños. Formula las excepciones que planteó de la siguiente manera: 1. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN pretendida por el actor porque esa entidad no ha incumplido con lo estipulado en la normativa vigente y 2. BUENA FE, pues ha desarrollado su objeto social dentro de los criterios de la buena fe, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones emanadas de la legislación Colombiana, con los contratos de arrendamiento y atendiendo cada uno de los requerimientos de las administraciones municipales donde ejerce su actividad.

En razón de lo expresado en la respuesta, mediante auto de 12 de junio de 2018 (Archivo digital 01 folio pdf 56/ 01.Primer Instancia/C1.Principal/050013103017201800283700), el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, requirió al accionante para que aportara la nomenclatura completa del establecimiento GANA al que se refiere en su demanda (**2018-00237**), requerimiento al que respondió el señor Bernardo Abel indicando que reafirma la dirección del local comercial indicada desde el inicio (Archivo digital 01 folio pdf 61/ 01.Primer Instancia/C1.Principal/050013103017201800283700).

Respecto a la acción popular **2018-00289** menciona que para la fecha en que fue instaurada, ya estaba adelantando un plan de intervención sobre el punto de venta ubicado en la Carrera 70 N°43-04, con el fin de garantizar las condiciones que eliminen las barreras arquitectónicas a personas con movilidad reducida, proyecto que consiste en la implementación de una rampa de aluminio de 1 metro de ancho, 1.5 metros de largo y una altura de 0.25 metros, la cual permitiría el acceso preferencial para personas con movilidad reducida, implementación que se realizará entre el 10 y el 14 de julio de 2018. Formula las excepciones de: 1. HECHO SUPERADO POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, ya que considera que cumplió con su obligación; y 2. BUENA FE porque ha desarrollado su objeto social dentro de los criterios de la buena fe, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones emanadas de la legislación vigente y con los contratos de arrendamiento de local comercial.

La Sociedad Las Moras S.A.S. vinculada a la acción popular identificada con radicado **2018 00225**, propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 48 N°7-276, acudió para indicar que la construcción a la cual hace referencia la acción popular se encuentra íntegramente y en su totalidad sobre suelo privado, lo cual se puede constatar en los linderos del inmueble, tanto en los títulos de adquisición como en el certificado de tradición y libertad; expresa que el muro frontal de la caseta ha sido el mismo que por muchos años fuera el cerramiento de la propiedad. Solicita denegar las pretensiones en la medida en que el suelo donde se encuentra ubicada la caseta en la que funciona el establecimiento de comercio es de su plena, exclusiva, perpetua, autónoma, irrevocable y real propiedad, aunado a que el uso que se le viene dando actualmente y desde hace mucho tiempo atrás, no contraviene las normas que regulan el uso del suelo, ni amenaza o pone en peligro derechos colectivos.

4. AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO.

La audiencia de pacto de cumplimiento fue declarada fallida en sesión del 24 de mayo de 2018, respecto de la acción popular identificada con radicado **2017-00706**, por la inasistencia de la accionada (Archivo digital 1 folio pdf 125/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600). Luego, mediante auto de 7 de septiembre de 2018 se ordenó acumular en su trámite las acciones populares correspondientes a los radicados **2017 00706**, **2018 00225**, **2018 00237** y **2018 00289**, ordenando continuar su trámite conjunto según la previsión del inciso 2° del artículo 150 del C.G.P., convocando a audiencia de pacto de cumplimiento para las que se encontraban pendientes de dicha diligencia. En dicha providencia fueron decretadas las pruebas pedidas en cada una de las acciones (Archivo digital 01 folios pdf 139 a 144/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600). En sesión de 14 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida pese a la asistencia de las partes (Archivo digital 01 folio pdf 205/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

5. ALEGACIONES.

Concluido el período probatorio, por auto de 23 de abril de 2019, se corrió

traslado a las partes para alegar por el término de cinco (5) días (Archivo digital 01 folio pdf 242/ 01.Primer Instancia/C1.Principal/05001310301720170070600), oportunidad que fue aprovechada por la accionada Réditos Empresariales S.A., refiriendo en relación con la denuncia que se identifica con **radicado 2018-00225** que el predio tomado en arrendamiento a la Sociedad Las Moras S.A.S. se encuentra ubicado dentro del espacio privado propiedad de la arrendadora, sin utilizar porción alguna de espacio público y respetando la normativa vigente; llama la atención del despacho porque considera que el actor no ha demostrado la ocupación del espacio público por cuenta del local comercial, toda vez que a pesar de que su ubicación está comprendida dentro del área de antejardín y situada dentro de los límites fijados en la licencia de construcción del área utilizada, también es claro que la ocupación de ésta área es realizada por particulares, lo que se constituye en una acción privada. Aclara que el área de antejardín a pesar de su afectación de espacio público, no se encuentra enmarcado como un bien de uso público, por cuanto la titularidad de ese bien se encuentra en cabeza del propietario del predio y no del Estado.

Para el **radicado 2018-00237**, expuso la accionada que ya realizó las modificaciones pertinentes en el local comercial ubicado en la Carrera 43 A N°10-10 de la ciudad de Medellín, contando ya el inmueble con libre acceso para personas con movilidad reducida que deseen acceder al punto de venta que allí funciona y en relación con la denuncia que refiere a la ausencia de servicios sanitarios, manifiesta que la actividad comercial ejercida en los establecimientos de comercio de Réditos Empresariales S.A. (GANA), está destinada exclusivamente a la realización de transacciones comerciales y financieras donde se maneja una amplia cantidad de dinero y documentos que deben ser cuidadosamente custodiados; por lo que apoyada en una decisión del Tribunal Superior de Pereira, que cita en su pronunciamiento, considera no estar obligada a tenerlos, pidiendo entonces que se nieguen las pretensiones.

Frente al **radicado 2018-00289** manifestó que contrario a lo que ha indicado el Municipio de Medellín a través de los informes que ha hecho llegar al trámite, ya se procedió a implementar una rampa metálica en el local comercial ubicado

en la Carrera 70 N°43-04; pide al despacho que se solicite al Municipio de Medellín realizar una visita al inmueble en virtud de la cual elabore un informe técnico idóneo y consecuentemente se declare la carencia de objeto, pues las fotografías que se muestran en los informes de la Alcaldía de Medellín han sido extraídas de la aplicación Google Maps, las cuales no están dando cuenta de la situación actual y real del inmueble.

Y en relación con la acción popular que se identifica con **radicado 2017-00706**, asevera que ya ejecutó en el punto de venta ubicado en la Calle 49 N°48-12 de esta ciudad, el plan de intervención al que hizo referencia al momento de dar contestación a la acción popular, el cual consistió en la construcción de una rampa en concreto de 1,16 mts de frente con 0,80 mts de fondo y pasamanos que va desde la línea de paramento hacia el interior del local por donde se tendría acceso preferencial para personas con movilidad reducida.

Con posterioridad y luego que el despacho insistió en la práctica probatoria de cara a obtener la visita por parte del Municipio de Medellín, mediante auto de 7 de marzo de 2022 se concedió nuevamente traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones (Archivo digital 59/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600), oportunidad que fue aprovechada por el actor popular insistiendo en la prosperidad de cada una de las denuncias de afectación de derechos colectivos (Archivo digital 62/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600); la accionada se pronunció en relación con la acción popular identificada con radicado **2018-00225** repitiendo las defensas que durante el trámite ha puesto de presente (Archivo digital 64/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

Alega en relación con la acción popular **2018-00237** que la denuncia del actor estuvo encaminada en este caso a la ausencia de baños en el local comercial ubicado en la Carrera 43 A N°10-10 de esta ciudad y que al momento de la visita realizada por el Municipio de Medellín y de ésta entidad rendir informe de la misma, se centra en indicar que la rampa allí habilitada para el ingreso de las personas con movilidad reducida no cumple con las exigencias establecidas, pero que como es una edificación antigua, debe aplicarse el

concepto de ajuste razonable. Recalca que la rampa sí cumple con los parámetros establecidos en la versión actualizada de la norma NTC4143, pidiendo no tener en cuenta el informe técnico porque no indica claramente en qué consiste el concepto de ajuste razonable. En cuanto a la denuncia por la ausencia de baños, indica que las actividades comerciales que desarrolla en sus establecimientos de comercio, se destinan exclusivamente a la realización de transacciones comerciales y financieras donde se maneja una amplia cantidad de dinero y documentos que deben ser cuidadosamente custodiados, por lo que no está obligada a contar con servicios sanitarios (Archivo digital 66/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

Para el radicado **2018-00289** expresó que luego de que el despacho le solicitó a la Alcaldía de Medellín actualizar el informe rendido anteriormente, dicha entidad visitó el local comercial ubicado en la Carrera 70 N°43-04 el 8 de marzo del año 2022, rindiendo informe técnico en el que se da cuenta que la rampa allí instalada no cumple con las exigencias establecidas y que se encuentra ocupando área perteneciente a espacio público lo que constituye una infracción urbanística y que por tal motivo se enviaría copia a la Inspección de Policía 11B-San Joaquín, procediendo ésta última a requerir a Réditos Empresariales para que adelantara las acciones tendientes a la demolición de la rampa, como en efecto procedieron, eliminando la rampa y adecuando el nivel del piso del local para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida, de todo lo cual se informó a la Inspección. Por lo expuesto, pide que se declare la existencia de un hecho superado (Archivo digital 68/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

Con respecto a la acción popular que se identifica con radicado **2017-00706** en la que se denuncia existencia de barreras arquitectónicas en el local comercial ubicado en la Calle 49 N°48-12 de la ciudad de Medellín, manifiesta que esa nomenclatura no corresponde a un local comercial sobre el cual se desarrolla el establecimiento GANA perteneciente a Réditos Empresariales, como así lo reconoce incluso el informe técnico emitido por la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín de fecha 16 de marzo de 2022, de donde deviene entonces que Réditos Empresariales no se encuentra legitimada

en la causa para resistir las pretensiones de la demanda de protección de intereses colectivos (Archivo digital 70/ 01.Primer Instancia/C1.Principal/05001310301720170070600).

6. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado de conocimiento, profirió sentencia de instancia el día 25 de mayo de 2022 (Archivo digital 75/ 01.Primer Instancia/C1.Principal/05001310301720170070600), mediante la cual decidió declarar la carencia de objeto por hecho superado en relación con el derecho e interés colectivo reclamado frente a los establecimientos de comercio abiertos al público ubicados en los locales comerciales que se identifican con la nomenclatura urbana de la ciudad de Medellín: Carrera 70 N°43-04 y Carrera 43 A 10-10.

Declaró improcedente el amparo respecto del local comercial ubicado en la Carrera 48 N°7-276, advirtiendo que la caseta se encuentra ubicada sobre área perteneciente al espacio público, lo cual constituye una infracción urbanística cuyo trámite está asignado al Inspector de Control Urbanístico del Sector y Las Moras S.A.S. por su condición de propietario.

Estimó la protección de derechos e intereses colectivos respecto del goce, utilización y defensa del espacio público para las personas con movilidad reducida respecto del local comercial ubicado en la Calle 49 N° 48-17 de la ciudad de Medellín, disponiendo que en el término de quince (15) días, Réditos Empresariales S.A. adecúe la pendiente longitudinal de la rampa en el 12% conforme al informe técnico. Disponiendo la integración de Comité con el promotor de la acción y con un funcionario de la Subsecretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, para la verificación de cumplimiento del fallo.

Condenó a Réditos Empresariales a pagar por reconocimiento de costas en favor del accionante señor Bernardo Abel Hoyos Martínez, por el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se efectúe el pago.

7. EL RECURSO DE APELACIÓN.

El actor popular presentó recurso de apelación refiriendo a que la sentencia es incongruente, pues no contiene un examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas (Archivo digital 76/01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

De la misma manera, a través de su apoderado judicial, la entidad accionada presentó recurso de apelación, exponiendo inconformidad con la decisión de primera instancia en cuanto a la condena en costas, porque considera que de conformidad con las normas aplicables a las acciones populares, la condena en costas es procedente sólo en caso de mala fe de alguna de las partes o cuando haya parte vencida, ninguna de las cuales ocurre en el presente caso, agregando que no existe prueba de erogación alguna causada por el actor popular (Archivo digital 79/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600).

Concedido el recurso de apelación, arribó el expediente a esta Corporación, donde mediante auto de 18 de octubre de 2022 se admitió el recurso y se concedió la oportunidad para sustentación y las respectivas alegaciones, dejando claro que el trámite de la segunda instancia se surtiría conforme a las normas contenidas en la Ley 2213 de 2022 (Archivo digital 02/02.Segunda Instancia).

En la oportunidad pertinente, el actor popular presentó escrito en el que concreta el radicado de cada acción popular y la denuncia que en cada una de ellas se contiene, con la dirección del local al que hace referencia, pidiendo finalmente que se profiera un fallo congruente que tenga en cuenta todos y cada uno de los documentos que ha aportado al trámite. Pide que para las agencias en derecho se tenga en cuenta la ley y los criterios de obligatoria aplicación, de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado (Archivo digital 05/02.Segunda Instancia).

Réditos Empresariales expuso los mismos argumentos que trajo a colación al momento de interponer el recurso de apelación, los cuales se dirigen a

cuestionar la condena en costas que en su contra fue impuesta (Archivo digital 08/02.Segunda Instancia).

II. CONSIDERACIONES

1. VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PROCESALES Y AUSENCIA DE IRREGULARIDADES CONFIGURATIVAS DE NULIDAD.

Concurren dentro del asunto *sub-examine* los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte, amén de que no se advierte irregularidad constitutiva de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado.

2. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER.

A fin de establecer la procedencia de afectar la sentencia de primera instancia y para atender los particulares argumentos expuestos por el actor popular en su recurso, deberá analizarse si el fallo fue congruente con las pretensiones de cada una de las demandas de protección de derechos e intereses colectivos; igualmente deberá el Tribunal determinar la procedencia o no de la condena en costas que fue impuesta a la accionada, por ser este el único aspecto frente al cual Réditos Empresariales manifestó inconformidad con la sentencia.

3. DE LAS ACCIONES POPULARES.

Al tenor del artículo 9º de la Ley 472 de 1998, las acciones populares, proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos y, podrán ser ejercidas, según el artículo 12, por toda persona natural o jurídica, por si misma o por quien actúe en su nombre. Las mismas, fueron instituidas como instrumento o medio de defensa de los derechos e intereses colectivos de las personas.

Los derechos colectivos, por su parte, son los derechos que tienen los seres humanos como grupo, a que la organización política proteja bienes de uso colectivo, valga la redundancia, como el medio ambiente, los recursos

naturales, la salubridad, el espacio público, contra los actos que los amenacen; así como la protección de los valores de la convivencia, como la paz, la pulcritud, la libre y leal convivencia en una economía de mercado libre, y los bienes y servicios de la comunidad.

La acción en examen, abarca otros derechos de similar naturaleza que estén consagrados en la Constitución y la ley y que no contraríen la finalidad pública que los identifica; de ahí, que pueda decirse, que la característica esencial de dicha acción sea su índole preventiva, dados los fines públicos y colectivos que la fundamentan y, que ella fue creada para precaver la lesión de bienes y derechos que afectan ese interés colectivo.

4. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA FAVORABLE EN ACCIÓN POPULAR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998, las acciones populares son un mecanismo para la protección de los derechos e intereses colectivos y se ejercen para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses o restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido los requisitos o presupuestos materiales que determinan el éxito de la pretensión formulada en acción popular; siendo estos: *(i)* una acción u omisión de la parte demandada; *(ii)* un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y; *(iii)* la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

5. DE LA ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. -LA REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y

DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES-.

Desde nuestra Constitución Política se ha instituido la protección de las personas con alguna limitación, pues en su artículo 13 literalmente expresa que:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”

De igual forma, el artículo 47 de la Carta Magna impone al Estado la obligación concreta de adelantar una política de prevención, rehabilitación e integración social para las personas con alguna condición física, sensorial y síquica, y la de prestarles la atención especializada que requieran. El canon superior es del siguiente tenor literal:

El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

En desarrollo de la norma precitada se expidió la Ley 361 de 1997, mediante la cual se establecieron mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad, norma que fuera reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1538 de 2005, adicionada por la Ley 1287 de 2009y modificada por la Ley 1316 de 2009.

Los artículos 1º a 3º de dicha Ley 361 consagran los principios generales de tal regulación, así:

Artículo 1º.- Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las personas en situación de discapacidad en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las personas en situación de discapacidad severas y profundas, la asistencia y protección necesarias.

Artículo 2º.- El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales.

Artículo 3º.- El Estado Colombiano inspira esta ley para la normalización social plena y la total integración de las personas en situación de discapacidad y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año de 1948, en la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas concernientes a las personas con limitación de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983”.

De igual manera el Título IV, de la misma disposición legal, en su Capítulo I trata el aspecto de la accesibilidad, así:

“Artículo 43.- El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, discapacidad o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

Parágrafo.- Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas en situación de discapacidad.

Artículo 44.- Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o

ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

Artículo 45.- Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades esenciales y en particular los individuos en situación de discapacidad severas y profundas que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal.

Artículo 46.- La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tomada en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.

El Gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las políticas en materia de accesibilidad y velará porque se promueva la cobertura nacional de este servicio.”

A su vez, el artículo 47 del capítulo II siguiente, sobre la *“Eliminación de barreras arquitectónicas”*, estipula que: *“La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley (...)*

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales”.

Por su parte, en el artículo 52 del mismo capítulo, se señala: ***“Lo dispuesto en este título y en sus disposiciones reglamentarias, será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente ley, para realizar las adecuaciones correspondientes. El Gobierno Nacional reglamentará las***

sanciones de tipo pecuniario e institucional, para aquellos particulares que dentro de dicho término no hubieren cumplido con lo previsto en este título” (Negrillas fuera de texto).

Como bien puede verse, las normas transcritas han dispuesto, entre otras, la obligación a los entes públicos y privados con edificios abiertos al público, de adecuar sus instalaciones para facilitar la accesibilidad de las personas discapacitadas o con reducción de su movilidad, en desarrollo del artículo 47 de la Constitución Política.

Según las definiciones contempladas por el artículo 2° del Decreto Nacional 1538 de 2005, la accesibilidad es la condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes.

Sobre barreras físicas define que, éstas son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas y barreras arquitectónicas son los impedimentos al libre desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las edificaciones.

Y, por movilidad reducida entiende que es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su aptitud de relacionarse con el entorno, al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales.

En el artículo 9° del aludido Decreto 1538 de 2005, se señalan los parámetros de accesibilidad para el diseño, construcción o adecuación de los edificios de uso público en general, indicándose en el numeral 2 del literal B), en torno a las edificaciones, que los desniveles que se presenten en edificios de uso público, desde el andén hasta el acceso del mismo, deben ser superados por medio de vados, rampas o similares.

Finalmente y para el efecto, se hace necesario referir que mediante la NTC-4143, se establecieron las condiciones mínimas y características generales que deben cumplir las rampas que se construyan en edificaciones, cuyo fin es facilitar el acceso a todas las personas; mediante la NTC-4139 se establecieron las condiciones para la accesibilidad al medio físico, símbolo gráfico y sus características generales, y en la NTC-6047 se establecieron las condiciones para la accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano.

III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Bien determinado está en el *sub examine* el objeto de la demanda de acción popular, pues así se detalló en los antecedentes de la presente decisión, todo lo cual se enmarca en que el accionante busca la protección de los derechos e intereses colectivos que estima vulnerados por Réditos Empresariales, ya que en los establecimientos de comercio que tiene y que se encuentran ubicados en la Calle 49 N°48-12 de Medellín (Radicado **2017-00706**); Carrera 48 N°7-276 (Radicado **2018-00225**), Carrera 43 A N°10-10 de Medellín (Radicado **2018-00237**) y Carrera 70 N°43-04 de Medellín (Radicado **2018-00289**), se requiere la adecuación estructural y locativa necesaria para lograr la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. De forma puntual se reclama en tres de ellas que se adecúe el acceso al cumplimiento de las normas técnicas (**Radicados 2017-00706, 2018-00237 y 2018-00289**); en la otra se denuncia ocupación del espacio público.

La réplica de la parte demandada estuvo encaminada a predicar la inexistencia de vulneración de derechos colectivos, porque las rampas instaladas en los locales comerciales que funcionan en la Calle 49 N° 48-12, Carrera 43 A N° 10-10 y Carrera 70 N°43-04 de Medellín, cumplen con las especificaciones técnicas que permitan el acceso a personas con movilidad reducida y porque en todo caso, ha actuado siempre de buena fe estando presta a adelantar las intervenciones que sean necesarias para el cumplimiento de las normas. En cuanto al reclamo dirigido a la inexistencia de servicios sanitarios, sustentó la inexistencia de vulneración de derechos en que no está obligada a ello en virtud de la actividad comercial que desempeña porque en sus establecimientos de

comercio se manejan grandes cantidades de dinero y frente a la ocupación del espacio público que se denuncia en la dirección Carrera 48 N° 7-276 se enfocó en manifestar al amparo de lo contestado por la vinculada propietaria del inmueble, que su establecimiento de comercio se encuentra en predio de propiedad privada perteneciente a la Sociedad Las Moras S.A.S.

Como bien se detalló en líneas anteriores, la sentencia de primera instancia declaró la existencia de carencia de objeto por hecho superado, luego de constatar que la accionada durante el trámite de la acción popular concretó los trabajos materiales necesarios para poner término a la denunciada vulneración; declaró improcedente el amparo reclamado frente al establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 48 N°7-276 de Medellín y concedió el amparo respecto al local comercial que se ubica en la Calle 49 N°48-7, disponiendo que en el término de quince (15) días, Réditos Empresariales S.A. adecúe la pendiente longitudinal de la rampa que allí existe, en el 12% conforme al informe técnico que sirvió de sustento a la decisión. Adicionalmente, condenó en costas a Réditos Empresariales en favor del accionante por el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que se efectúe el pago.

Frente a la anterior determinación ambos extremos de la Litis presentaron recurso de apelación, reclamando el actor popular según se logra extraer, que la sentencia no fue congruente y la accionada por su parte, manifestando inconformidad con la condena en costas que le fue impuesta.

Con el fin de resolver el puntual aspecto por el cual reclama el recurrente, cuando dice que el fallo apelado no fue congruente, pertinente resulta traer a colación la Sentencia de Unificación proferida por el Consejo de Estado el 5 de junio de 2018, dentro del radicado 15001 33 31 001 2004 01647 01 (SU) (REV-AP), pues allí esta alta Corporación, a la que se cita en consideración a su abundante jurisprudencia en materia de acciones populares, unificó lo dicho en cuanto a la aplicación del principio de congruencia en las sentencias de acción popular, precisando que el Juez Constitucional al decidir una acción popular puede pronunciarse respecto de derechos o intereses colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados, empero ello es así,

siempre y cuando guarden estrecha y directa relación con los derechos respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección por parte del actor popular y respecto de los cuales la demandada haya contado con la posibilidad de pronunciarse en ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. Así se pronunció:

Visto así el asunto, considera la Sala que este aspecto debe ser tenido en cuenta a la hora de unificar jurisprudencia sobre el tema, por lo que así se procederá en los términos que se exponen.

Entonces, si bien es cierto que el juez popular cuenta con amplias facultades para adoptar las decisiones e impartir las órdenes que considere necesarias para lograr la protección de los derechos e intereses colectivos que encuentre amenazados o lesionados, tal potestad no puede entenderse de manera absoluta por cuanto, con ocasión de esa atribución no puede llegar al extremo de desconocer las características propias de la acción popular y, en especial, las disposiciones que respecto de su trámite ha establecido el propio legislador.

Sobre el punto, debe precisarse que la posibilidad de amparar o proteger derechos colectivos diferentes a los indicados en la demanda, no exime en manera alguna al actor popular de la carga de indicar en la demanda los hechos y los derechos o intereses colectivos cuya protección invoca, así como tampoco del deber de agotar el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que en caso contrario el juez se encuentra facultado para inadmitir la demanda y en caso de que ésta no sea subsanada, de rechazarla.

Además, se debe tener en cuenta que desde la misma petición previa ante los demandados, en principio, el actor popular debe precisar los hechos y derechos que fundamentan su reclamación, exposición con base en la cual se debe admitir la demanda.

Así las cosas, continúa siendo un deber para la parte actora establecer claramente la *causa petendi* y cumplir con la carga probatoria que le corresponde, con el fin de que el o los demandados puedan ejercer su derecho de defensa en debida forma y el proceso se desarrolle en torno de la misma, conforme a las normas sustanciales y procesales que rigen este tipo de trámites, es decir, para que desde el principio se identifique de manera correcta el objeto de la acción popular y se garanticen los derechos de todos los intervinientes en el proceso.

Ahora, como lo ha sentado la jurisprudencia -antes relacionada- de esta Corporación, nada obsta para que en el curso del trámite procesal se encuentre demostrada la vulneración de derechos o intereses colectivos que pese a que no se incluyeron en la demanda inicial sí se relacionan directamente con la causa petendi y frente a los cuales los demandados han tenido la oportunidad de pronunciarse, por lo que le es dable al juez popular emitir las órdenes que considere pertinentes para garantizar su protección.

Sin embargo, en los eventos que la parte demandada no haya podido ejercer su derecho de defensa porque por ejemplo, los derechos amparados no tienen relación alguna con la demanda inicialmente planteada, se estaría frente a un desbordamiento del ámbito de protección lo que se traduce en una clara violación del debido proceso de la parte demandada, toda vez que se estaría cercenando la posibilidad de defensa respecto de aquellos.

En este punto, se reitera que los amplios poderes del juez popular no pueden exceder los límites establecidos en la demanda por el actor a la hora de establecer la *causa petendi* a la cual queda atada el proceso en general.

En conclusión, dentro de los procesos de acción popular, la flexibilización del principio de congruencia en beneficio de la protección de derechos e intereses colectivos no puede implicar el desconocimiento del derecho de contradicción y de defensa de la parte demandada.

Por lo tanto, el juez popular puede pronunciarse respecto de derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados o amenazados siempre y cuando, éstos guarden una estrecha y directa relación o conexidad con los derechos respecto de los cuales sí existió una solicitud expresa de protección por parte del actor popular y frente a los cuales la parte demandada haya tenido la oportunidad de pronunciarse a lo largo del proceso, es decir, frente a los cuales pueda verificarse que conoció y pudo presentar argumentos de defensa.

En dichos términos, se unificará jurisprudencia frente a este punto.

Entendido entonces que el Juez que decide la acción popular, puede pronunciarse respecto de derechos e intereses colectivos que no han sido invocados en la demanda como vulnerados, siempre que guarden relación con los hechos de la demanda, es decir, manteniéndose el deber del actor popular de establecer claramente la *causa petendi* y cumplir con la carga probatoria que le asiste, además de respetar el debido proceso en la posibilidad de ejercer la defensa y contradicción ala parte accionada, encuentra el Tribunal que ninguna razón le asiste al accionante para cuestionar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín como incongruente.

Nótese que pese a las dificultades que se presentaron para obtener los respectivos informes técnicos, el fallador de primer grado insistió en la obtención de los mismos, de manera que pudieran brindarle la claridad suficiente para decidir; y en su providencia, se ocupó de analizar detalladamente la situación particular de cada uno de los establecimientos de comercio frente a los que se

demandó, refiriendo tanto al registro fotográfico aportado por el actor como a los informes técnicos que arrió la Subsecretaría de Control y Gestión Territorial del Municipio de Medellín, indicando las razones por las cuales llegó a la conclusión que plasmó en su fallo.

Resalta el Tribunal que contrario a lo considerado por el actor popular, el señor Juez, sí aplicó el principio de congruencia, por ejemplo cuando se ocupó de lo que tiene que ver con el establecimiento de comercio que se identificó en la demanda como el ubicado en la Calle 49 N°48-12 y que luego por los informes técnicos se determinó que su nomenclatura es la Calle 49 N° 48-17, verificando que frente a este local comercial la accionada sí tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción y procediendo entonces a fallar, al punto que concedió el amparo porque apoyado en las probanzas, se puede concluir que la rampa allí instalada por Réditos Empresariales, no cumple con la norma técnica NTC4143, tal y como se dejó sentado en informe técnico rendido en el mes de marzo del año 2022 por la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín.

De esta manera, no le asiste razón al accionante en el cuestionamiento que le hace a la sentencia de primer grado y por tanto en cuanto a sus reclamos, no hay lugar a afectar esa decisión.

De otro lado, el actor popular hizo una somera alusión al monto de las agencias en derecho que le fueron fijadas, frente a ello basta con indicar que el tópico que refiere al monto de las agencias en derecho no es asunto que deba ventilarse en el recurso de apelación de la sentencia de primer grado, pues por disposición de la regla 5ª del artículo 366 del C.G.P. *“La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas”*.

Resuelto el recurso de apelación presentado por el actor popular, se pasará a estudiar el reparo que formuló Réditos Empresariales frente a la sentencia de primera instancia, al cuestionar la condena en costas que le fue impuesta, para lo cual se estudiará si efectivamente procede la condena en costas tal y como se

plasmó en la sentencia apelada; para ello se analizará si la adecuación de los ingresos a los locales comerciales frente a los cuales se declaró hecho superado se produjo con ocasión de la intervención del actor popular, caso en el cual es procedente la condena en costas impuesta a la parte resistente y en general si la acción popular sirvió para que fueran corregidas las situaciones que generan la afectación de los derechos e intereses colectivos cuya protección se reclamó.

Para lo anterior, basta remitirse a las pruebas documentales obrantes en el expediente, allegadas a la actuación por el Municipio de Medellín (Archivos digitales 42 a 46/ 01.Primer Instancia/ C1.Principal/05001310301720170070600), con las cuales se da cuenta que en efecto, con ocasión de la acción popular se iniciaron por parte de la accionada las acciones que condujeron a la adecuación de los accesos en algunos de sus puntos, tanto así que incluso en uno de ellos no se ha hecho y por tal razón se concedió el amparo; de ahí, que resulte adecuada la decisión adoptada en primera instancia de imponer condena en costas. Es que el análisis probatorio permite concluir que la vulneración existió, cosa diferente es que al momento de fallar se configure el hecho superado, que incluso no aplica para todos los locales comerciales denunciados.

Son suficientes los elementos de convicción obrantes en el plenario, para dar cuenta de la incidencia de la presente acción popular en la superación del estado de vulneración y en la necesidad de impartir orden, como tópico determinante en esta instancia.

La posición que ha asumido esta Sala es la de entender que en casos como el presente sí hay lugar a imponer condena en costas a favor del actor popular, para ello ha considerado que en materia de condena en costas el legislador adoptó un criterio objetivo, condenando en costas a quien resulta vencido dentro de un proceso jurisdiccional; entendiendo en este caso que, como la parte accionada en unos de los casos corrigió la denunciada situación durante el trámite de la presente acción popular, configurándose así la figura de hecho superado, pero no en todos siendo incluso necesario que se proferiera orden en su contra, ello deriva en la consecuente condena en costas que le corresponde

asumir.

Para lo anterior se ha tomado mano de lo expuesto por la H. Corte Constitucional al indicar que: “...*adopta un criterio objetivo en lo relativo a la condena en costas (...) No entra el juez, por consiguiente, a examinar si hubo o no culpa en quien promovió el proceso, recurso o incidente, o se opuso a él, y resultó vencido. Este criterio objetivo está plasmado en la primera de las reglas (...), según la cual se condenará en costas a la parte vencida en el proceso*”. (Corte Constitucional, sentencia C-480 de 1995. Magistrado ponente, doctor Jorge Arango Mejía).

Así mismo ha expuesto la Sala que no existe norma especial en donde se advierta que no puede existir condena en costas a favor del actor popular y en contra de los accionados, pues sólo el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 refiere al tema, pero para decir que se condena al actor cuando se comprueba la mala fe de éste, que obviamente no es lo acaecido en este caso donde sus pretensiones salieron adelante y como equivocadamente pretende hacerlo ver la recurrente Réditos Empresariales S.A.

CONCLUSIÓN.

El colofón de lo expuesto es la decisión de confirmar la sentencia apelada.

COSTAS.

Pese a las resultas del recurso que fue desfavorable a ambos extremos de la Litis aquí recurrente, no hay lugar a imponer condena en costas de segunda instancia por no haberse causado (Regla 1ª y 8ª artículo 365 del C.G.P.).

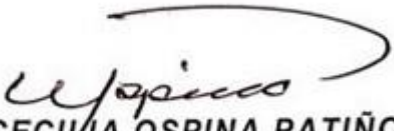
En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN EN SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia descritas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE
Los Magistrados,



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO
Magistrado



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022